

Bolivia (Nivel 2)

Bolivia es principalmente un país de origen desde donde hombres, mujeres y niños son sometidos a condiciones de trata con fines sexuales y trabajo forzoso dentro del país o en el extranjero. Un gran número de bolivianos se encuentran en condiciones de trabajo forzoso en Argentina, Brasil, Chile, Perú, España, Estados Unidos y en otros países, generalmente en condiciones de explotación en talleres y en la agricultura, así como en el servicio doméstico. En Bolivia, mujeres y niñas son objeto de trata con fines de explotación sexual, a menudo en zonas urbanas. Mujeres y niñas bolivianas también son explotadas para la trata sexual en países vecinos, como Argentina, Perú y Chile. En una medida más limitada, mujeres de otros países cercanos, entre ellos Brasil y Paraguay, han sido identificadas como víctimas de trata sexual en Bolivia. Los miembros de las comunidades indígenas son vulnerables al trabajo forzoso y la trata con fines sexuales. Dentro del país, niños bolivianos se encuentran en trabajos forzados en la minería, la agricultura y como sirvientes domésticos, y algunas mujeres y niñas son forzadas a trabajar como doncellas. Los informes también indican que algunas familias alquilan a sus hijos para realizar trabajos forzados en la minería y la agricultura cerca de las zonas fronterizas con Perú. En Chile y Brasil, las autoridades han identificado a algunos niños y niñas de Bolivia obligados a transportar drogas como mensajeros.

El gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Durante el año, las autoridades lograron la primera convicción en Bolivia por el delito imponer trabajo forzoso y creó una nueva oficina para coordinar los esfuerzos de enjuiciamiento en casos de trata. Sin embargo, a pesar del gran número de posibles casos de trata identificados por las unidades especializadas en trata y contrabando de personas en todo el país, las autoridades no informaron cuántas víctimas identificaron o ayudaron durante el año y los servicios para las víctimas, incluyendo los servicios para la gran cantidad de víctimas bolivianas repatriadas, fueron insuficientes.

Recomendaciones para Bolivia: Mejorar los servicios para las víctimas en todo el país a través de mayores recursos destinados a la asistencia especializada a las víctimas de trata de personas, incluyendo a las víctimas de trabajo forzoso; fortalecer los esfuerzos para enjuiciar los delitos de trata, y condenar y castigar a los tratantes y a los reclutadores fraudulentos de mano de obra; aumentar los recursos para las unidades especializadas en trata de la fiscalía y la policía con el fin de hacer frente al reto que representa pasar de la investigación al enjuiciamiento exitoso; aumentar los esfuerzos para identificar víctimas de trata de forma

proactiva mediante el desarrollo de procedimientos formales para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables; intensificar esfuerzos de aplicación de las leyes contra el trabajo forzoso de adultos y niños , incluyendo la servidumbre doméstica y la prostitución forzada de personas adultas; trabajar con los países de destino para asegurar que las víctimas de trata que regresan de Bolivia reciban servicios de atención; mejorar las oportunidades de formación continua para los agentes de policía, funcionarios judiciales, trabajadores sociales y otros funcionarios del gobierno; y aumentar la conciencia pública sobre la trata de personas, especialmente entre los bolivianos que buscan trabajo en el extranjero.

Enjuiciamiento

El gobierno logró un avance desigual en sus esfuerzos de aplicación de las leyes contra la trata de personas durante el año. Mientras que las autoridades lograron la primera condena del país por el delito de imposición de trabajo forzoso, la tasa de enjuiciamientos exitosos continuó siendo baja en comparación con la gran cantidad de casos identificados. Bolivia prohíbe todas las formas de trata de seres humanos mediante la Ley 3325, una ley sobre trata y contrabando de seres humanos del año 2006 que establece penas de prisión de ocho a doce años por delitos de trata interna y transnacional. Estas penas son suficientemente severas y proporcionales a las penas prescritas en la legislación boliviana para otros delitos graves, como la violación. Esta ley también prohíbe la adopción ilegal como una forma de trata de seres humanos, un delito que no está comprendido en el Protocolo sobre Trata de Personas de las Naciones Unidas del año 2000.

La Policía Boliviana Nacional informó de la investigación de más de 250 casos potenciales de trata de personas en el año 2011 y los fiscales informaron que cerca de 300 casos de trata seguían pendientes. No hubo información disponible sobre cuántos de estos casos estuvieron relacionados con trabajo forzado o adopción ilegal. Sigue habiendo una gran disparidad entre el gran número de casos investigados y el escaso número de casos enjuiciados. Las autoridades no informaron sobre la cantidad de juicios iniciados durante el año. Con la cooperación sustancial de la sociedad civil, las autoridades enjuiciaron y condenaron a dos delincuentes por trata en el año 2011 conforme a las leyes sobre contrabando de seres humanos, con penas de 13 años y 4 meses, sentencias que los traficantes apelaron. El gobierno también informó sobre condenas a siete delincuentes por trata con fines de explotación sexual a través de acuerdos de sentencia abreviada bajo las leyes de trata; según informes, las condenas fueron fijadas por períodos entre 8 y 10 años de prisión. En comparación, en 2010, el gobierno informó sobre el enjuiciamiento de 31 infractores de las leyes contra trata y sobre la condena de siete bajo las leyes sobre proxenetismo y explotación sexual.

El gobierno mantuvo 13 unidades especializadas en trata y contrabando de seres humanos con financiamiento de un gobierno extranjero; se inauguraron dos unidades durante el año. La unidad de la fiscalía especializada en la lucha contra la trata en la capital careció de fondos y personal adecuados. Durante el año, la falta de mecanismos para el seguimiento de datos relacionados con los delitos de trata ocasionó que fuera difícil para los funcionarios coordinar o realizar un seguimiento de los casos a lo largo del proceso judicial. En septiembre de 2011, el Fiscal General anunció la creación de una oficina de coordinación nacional encargada de delitos sexuales, trata de personas y contrabando de seres humanos. Durante el período objeto de este informe, esta oficina centralizó la información, elaboró protocolos de atención a las víctimas y designó a un fiscal en cada departamento como coordinador regional para estos temas. Funcionarios policiales y fiscales han recibido capacitación contra la trata financiada por organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y un gobierno extranjero, pero el gobierno boliviano no informó sobre la financiación de ningún curso de capacitación para sus funcionarios. Hubo informes de que algunos jueces fueron renuentes a utilizar la ley contra la trata de personas. Las autoridades no informaron sobre la investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios de gobierno por complicidad relacionada con delitos de trata. No hubo informes sobre cooperación en investigaciones internacionales con gobiernos de países receptores durante el año.

Protección

Los esfuerzos del gobierno boliviano para proteger a las víctimas de trata continuaron siendo limitados y organizaciones de la sociedad civil proporcionaron la gran mayoría de la atención especializada, sin financiamiento del gobierno. El gobierno careció de procedimientos formales para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables, aunque según algunos informes, la policía y los fiscales condujeron a víctimas hacia centros de servicios y albergues durante el año. En los últimos años, la policía boliviana dio informes sobre la cantidad de posibles víctimas de trata identificadas por sus funcionarios así como acerca de la cantidad de víctimas conducidas a los servicios asistenciales; las autoridades no presentaron informes acerca de estos datos para el año 2011.

El gobierno local de La Paz proporcionó algo de financiación al albergue de una ONG dedicado a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y víctimas de abuso sexual; el albergue informó haber ayudado a 38 víctimas de trata durante el año. Una unidad para víctimas especiales en Santa Cruz declaró haber proporcionado atención médica, vivienda, alimentos y ropa a 18 víctimas en 2011.

Dos organizaciones de la sociedad civil en Potosí recibieron fondos limitados del gobierno para ayudar a seis mujeres víctimas de trata. Organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos, sin financiación del gobierno, proporcionaron la mayor parte de los programas de albergue y de reintegración a víctimas de trata de personas; la mayor parte de estos servicios estuvieron dirigidos a mujeres víctimas de abuso y algunos de estos establecimientos también dieron albergue a delincuentes juveniles. Servicios de atención a las víctimas, temporales y de largo plazo, no estuvieron disponibles en algunas partes del país. Los servicios para víctimas mujeres adultas y para víctimas masculinas fueron prácticamente inexistentes. Funcionarios argentinos informaron que identificaron cientos de víctimas bolivianas de trata durante el año, muchas de las cuales presuntamente optaron por regresar a Bolivia. No hubo informes de que el gobierno prestara asistencia a las víctimas bolivianas repatriadas de otros países.

El gobierno alentó a las víctimas a participar en las investigaciones y el enjuiciamiento de los tratantes, a pesar de que las víctimas a menudo optaron por no cooperar debido a su temor a represalias por parte de los traficantes y a su falta de confianza en el sistema judicial. Una unidad de víctimas especiales en Santa Cruz prestó asistencia jurídica a 39 víctimas en 2011. Una organización no gubernamental informó que los funcionarios no suelen grabar las declaraciones iniciales de las víctimas que podrían ser utilizadas durante la presentación de pruebas en lugar de que la víctima testifique ante la corte. Por otra parte, ya que los tribunales mantienen registros abiertos, no existieron mecanismos para proteger la información sobre las víctimas de trata y la estructura legal a menudo proporcionó una mayor protección a los delincuentes acusados de trata que a las víctimas. El gobierno no proporcionó a las víctimas extranjeras de trata alternativas legales a su deportación a países donde podrían sufrir represalias o penurias.

Prevención

El gobierno mantuvo esfuerzos limitados de prevención y de sensibilización del público, en gran parte en colaboración con donantes internacionales. El Consejo Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas no informó haberse reunido durante el año y la coordinación efectiva entre las agencias del gobierno fue baja. Los investigadores de las unidades especializadas contra trata y contrabando de personas informaron que hablaron en escuelas para crear conciencia sobre la trata de personas. No se informó de esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales o trabajo forzado durante el año. El gobierno proporcionó capacitación en derechos humanos, con un contenido de lucha contra la trata, a sus efectivos militares antes de ser desplegados en misiones internacionales de mantenimiento de la paz.